



Consejo de Seguridad

Distr. general
13 de octubre de 2022
Español
Original: inglés

Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití

Informe del Secretario General

I. Introducción

1. Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución [2645 \(2022\)](#) del Consejo de Seguridad, por la que el Consejo prorrogó hasta el 15 de julio de 2023 el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) de conformidad con su resolución [2476 \(2019\)](#), en virtud de la cual se creó la BINUH; además, en la resolución [2645 \(2022\)](#) se ajustaron los requisitos de presentación del informe a 90 días, en lugar de 120 días. En el informe se recogen los acontecimientos destacados ocurridos desde mi informe anterior ([S/2022/481](#)) y se ofrece información actualizada sobre el cumplimiento del mandato de la BINUH.

II. Cuestiones políticas y buena gobernanza

2. La situación actual en Haití pone de manifiesto hasta qué punto las dimensiones política, de seguridad, de desarrollo y humanitaria están entrelazadas y se refuerzan mutuamente. Las bandas armadas han prosperado en este entorno, haciéndose más fuertes y aumentando su influencia. En las últimas semanas, el dramático deterioro de las condiciones de seguridad ha paralizado el país. Las bandas criminales han tomado el control de instalaciones estratégicas vitales como el puerto internacional de Puerto Príncipe y la terminal de combustible de Varreux, la más importante del país. El bloqueo de la terminal de combustible ha provocado la práctica paralización de servicios críticos como la distribución de agua y el saneamiento, la recogida de basura, la electricidad y los centros de salud. En este entorno, el cólera ha hecho su aparición, y la situación actual ha generado las condiciones idóneas para que esa enfermedad aumente exponencialmente en todo el país.

3. Luego del primer aniversario del asesinato del ex-Presidente, Jovenel Moïse, el 7 de julio, aumentaron los disturbios civiles en torno a Puerto Príncipe y en Cabo Haitiano (Departamento del Norte), Petit-Goâve (Departamento del Oeste) y Jacmel (Departamento del Sudeste), con importantes manifestaciones de protesta por el aumento de la inflación y la extrema escasez de combustible y en las que se pedía la dimisión del Primer Ministro, Ariel Henry.

4. El anuncio realizado por el Primer Ministro el 11 de septiembre de suprimir los subsidios a los carburantes desencadenó un nuevo ciclo de disturbios violentos. Se levantaron barricadas en las carreteras de todo el país, lo que hizo que la capital y los



grandes centros urbanos quedaran completamente aislados. La acción concertada de la policía para despejar las carreteras comenzó el 16 de septiembre, cuando una coalición de bandas criminales de la capital tomó el control de la principal terminal de combustible del país, en Varreux. Los firmantes de los distintos acuerdos cambiaron de alianzas ante estas crecientes tensiones, haciendo que los esfuerzos por alcanzar un consenso se hicieran más complejos.

5. Durante los disturbios, el Primer Ministro expresó su empatía por el sufrimiento humano y deploró el saqueo de bienes esenciales y de la ayuda humanitaria. Alentó a los haitianos a que no se dejaran engañar por la retórica política violenta, a que se opusieran a los intereses creados y a que se unieran por el bien de la nación. Reiteró su llamamiento a un diálogo amplio y abierto con todas las partes interesadas e hizo hincapié en el compromiso del Gobierno de fortalecer la policía nacional, aumentar los ingresos aduaneros, mejorar la economía y reducir los subsidios regresivos al combustible.

6. El Primer Ministro, refiriéndose a los agravios socioeconómicos subyacentes a las protestas, expuso un plan de política social de seis puntos para el presupuesto del Estado correspondiente al ejercicio 2022/23, utilizando asignaciones adicionales recaudadas mediante la reforma de las aduanas y los subsidios. Los puntos del plan son los siguientes: a) inversión en desarrollo agrícola e infraestructura; b) alimentación escolar; c) construcción de comedores sociales; d) un fondo para la creación de empleos decentes; e) limpieza de las calles; y f) intervenciones fiscales que ayuden a compensar el aumento del costo de la vida.

7. Muchas de las principales personalidades políticas del país se pronunciaron durante los disturbios civiles; la mayoría de ellas instaron a la población a mantener la calma, en tanto que algunas otras incitaron a los manifestantes con un lenguaje abiertamente incendiario dirigido contra las Naciones Unidas y las misiones diplomáticas. El Ministro de Justicia y Seguridad Pública formuló una declaración en la que condenaba la violencia y prometía hacer que los instigadores respondieran ante la ley.

8. A pesar de los esfuerzos realizados por la BINUH por sentar a la mesa a los principales interlocutores, únicamente se lograron avances limitados hacia la consecución de un acuerdo liderado por los haitianos que permitiera la celebración de elecciones legislativas y presidenciales en un plazo consensuado. Antes de que estallaran los disturbios, representantes del Gobierno y varios grupos de la sociedad civil y plataformas políticas habían trabajado para ampliar el consenso acerca de las elecciones y el regreso a un orden constitucional. A finales de junio, el comité tripartito, compuesto por representantes del mundo académico, organizaciones confesionales y el sector privado, publicó un informe sobre las consultas celebradas con más de 170 partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil sobre el modo de poner fin a la crisis. En el informe se proponía un nuevo acuerdo de reparto del poder basado en un período de transición de hasta dos años.

9. Los días 14, 15 y 18 de julio, el Primer Ministro, Ariel Henry, convocó una ronda inicial de negociaciones entre los firmantes del acuerdo político de 11 de septiembre y los líderes de la delegación conjunta de la Comisión para una Solución Haitiana a la Crisis (conocida como Grupo Montana) y las organizaciones firmantes del memorando de entendimiento nacional. Según las declaraciones realizadas por ambas partes, seguía habiendo desacuerdo en cuanto a si el poder ejecutivo debía seguir siendo dirigido únicamente por un Primer Ministro o si tenía que ser reemplazado por un órgano directivo provisional bicéfalo, integrado por un Presidente y un Primer Ministro. Además, hay opiniones divergentes en cuanto a la inclusión de nuevas partes interesadas en las conversaciones.

10. El estancamiento político impulsó a un grupo de actores del sector privado a manifestarse en una carta abierta de fecha 23 de agosto, en la que pedían al Gobierno que movilizara los ingresos internos mediante la recaudación de impuestos, tarifas y aranceles aduaneros como medio para seguir financiando a la policía nacional. El llamamiento fue bien recibido por muchas partes que se mostraron partidarias de que los directivos empresariales desempeñaran un papel influyente en la contención de las consecuencias económicas de la crisis.

11. No se han producido novedades en el proceso de nombramiento de nuevos miembros de entre los nueve que componen el Consejo Electoral Provisional, un paso necesario para la celebración de elecciones y una disposición clave del acuerdo político de 11 de septiembre. Una posible consecuencia de ello es que se ponga en peligro tanto la inversión de capital a largo plazo en la institución como sus valiosos recursos humanos.

12. Además de las iniciativas encaminadas hacia el diálogo en el país, las organizaciones regionales han manifestado su disposición a desempeñar un papel proactivo de asistencia al Gobierno de Haití. En su 43ª reunión ordinaria, celebrada del 3 al 5 de julio en Paramaribo, la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) aprobó un comunicado final en el que se expresaba profunda preocupación por el deterioro de la situación de la seguridad en Haití y se reiteraba que la región estaba interesada en ayudar a resolver la crisis, entre otras cosas mediante una misión de determinación de los hechos. Posteriormente, el Gobierno de Suriname acogió el 8 de julio la cuarta reunión virtual de asociados internacionales de Haití, que contó con la presencia de representantes de 17 Gobiernos y donantes internacionales y en la que los participantes destacaron la necesidad de que las partes interesadas de Haití se unieran y definieran un nuevo camino a seguir e instaron a que se hicieran contribuciones al fondo colectivo para la asistencia en materia de seguridad a Haití.

13. A petición del Gobierno de Haití, el 17 de agosto se organizó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Haití exhortó a los asociados regionales a que respaldaran las iniciativas contra el tráfico ilícito de armas y solicitó asistencia para reforzar la policía nacional y para que se proporcionara urgentemente equipo para las fuerzas del orden. El 1 de septiembre, el Director General Interino de la Policía Nacional de Haití reiteró esa misma solicitud en la Cumbre de Jefes de Policía de las Naciones Unidas que se celebró en la Sede de las Naciones Unidas (Nueva York).

14. Posteriormente, el Gobierno, tratando de hacer frente al bloqueo ininterrumpido del puerto, al que la policía no había podido poner fin, y a la aparición del cólera, emitió el 7 de octubre una solicitud para el despliegue inmediato de una fuerza internacional especializada provista de un número suficiente de efectivos para detener la crisis humanitaria en todo el país, causada en gran medida por la actuación de las bandas armadas, y para permitir la distribución de combustible y agua, la apertura y puesta en funcionamiento de hospitales y escuelas y la libre circulación de bienes y personas. Tras la celebración de amplias consultas por parte de la Secretaría, incluida una visita a Haití del 4 al 7 de septiembre para mantener conversaciones con el Gobierno, el 8 de octubre de 2022 el Secretario General presentó una carta dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad ([S/2022/747](#)) en la que se exponían, conforme a lo solicitado por el Consejo de Seguridad en la resolución [2645 \(2022\)](#), opciones para mejorar el apoyo en materia de seguridad a Haití.

15. Durante el período sobre el que se informa, la BINUH y el sistema de las Naciones Unidas siguieron apoyando la reanudación del diálogo mediante consultas y reuniones oficiosas para encontrar voces constructivas entre las comunidades

marginadas, las mujeres y los jóvenes de todo el espectro político. En cooperación con la sociedad civil haitiana, la BINUH y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) celebraron en junio un taller sobre gobernanza en el que se trataron los principales problemas en materia de seguridad, reforma constitucional y elecciones. El 13 de agosto, las Naciones Unidas prestaron apoyo a la celebración de un foro al que asistieron grupos LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas que vivían con el VIH/sida y organizaciones de mujeres y que se centró en la inclusión política de las comunidades marginadas. Por su parte, la BINUH dio apoyo a una reunión de la sociedad civil celebrada el 25 de agosto en la que se reanudó el diálogo con los miembros del Gobierno, el tercio restante del Senado, los signatarios del acuerdo político de 11 de septiembre y los líderes de la iniciativa conjunta Grupo Montana-Memorando de entendimiento nacional. Además, el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la Secretaría también financió el despliegue de dos expertos en diálogo al objeto de estudiar posibilidades de progreso en el contexto político actual.

III. Reducción de la violencia

16. El 7 de julio estallaron importantes enfrentamientos en el municipio de Cité Soleil (Departamento del Oeste) entre dos bandas armadas rivales. Entre el 7 de julio y el 5 de agosto, 221 personas fueron muertas (entre ellas, 14 mujeres y 7 niñas), 183 resultaron heridas (de las cuales 38 eran mujeres, 6 niñas y 14 niños) y ocho hombres sufrieron desapariciones forzadas. Al menos 57 mujeres de edades entre los 19 y los 47 años fueron víctimas de violencia sexual, y algunas de ellas fueron violadas repetidamente. Ante esta situación, la policía nacional creó una comisión de investigación y entrevistó a las víctimas y a sus familiares en colaboración con la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.

17. Durante los enfrentamientos, la policía, sin control sobre las comisarías de Cité Soleil, no pudo eliminar las barricadas que las bandas habían construido en las principales vías de comunicación. La policía no ha sido capaz de acceder a otros barrios controlados por las bandas, como Martissant, Village de Dieu o la parte baja de Delmas, todos ellos en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Se siguen recibiendo denuncias de bandas que perpetran delitos utilizando uniformes policiales falsos, lo que supone un nuevo reto para la eficacia de la policía. No obstante, durante varias semanas la policía realizó progresos visibles en su lucha contra las bandas responsables de los asesinatos y secuestros de agentes de policía en Croix-des-Bouquets (departamento del Oeste) y Petite Rivière de l'Artibonite (departamento de Artibonite).

18. El 10 de junio, el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe fue asaltado y ocupado por bandas fuertemente armadas. Hasta la fecha, la policía no ha recuperado el control de las instalaciones. En incidentes separados ocurridos entre el 9 y el 20 de junio en Puerto Príncipe, siete funcionarios de aduanas fueron secuestrados y posteriormente liberados a cambio de un rescate. El 16 de junio y el 9 de julio, la Autoridad Portuaria Nacional de Haití fue objeto de ataques. Otras instituciones ubicadas en Puerto Príncipe, como la Penitenciaría Nacional, el Tribunal Superior de Cuentas y de lo Contencioso-Administrativo y el Banco Central, también fueron objeto de graves amenazas, lo que llevó a la policía a desplegar de forma preventiva una presencia estática y a realizar patrullas policiales.

19. La violencia de las bandas también se propagó a las regiones más allá de la capital. En el departamento de Artibonite, las bandas impidieron la libertad de circulación a lo largo de la ruta arterial nacional, destruyendo bienes y secuestrando viajeros. Para responder a esos actos, la policía llevó a cabo numerosas operaciones

de liberación de personas secuestradas en las que murió un agente de policía y se produjeron varias bajas entre los miembros de las bandas.

20. La delincuencia violenta, en particular los secuestros y los homicidios, alcanzó niveles inusitados en los municipios de Cité Soleil, Croix-des-Bouquets, Delmas, Puerto Príncipe y Tabarre (departamento del Oeste). Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2022, las autoridades registraron 877 secuestros, de los cuales 182 fueron de mujeres, 13 de niñas y 15 de niños. El número de secuestros siguió siendo elevado durante todo el período sobre el que se informa, si bien habían llegado a su máximo nivel en el mes de mayo. Aumentó la frecuencia con que los médicos y los empresarios fueron objeto de secuestros, dado su potencial para pagar rescates más elevados. La policía registró 1.349 homicidios dolosos en todo el país, la mayoría en el área metropolitana de Puerto Príncipe (16,8 homicidios por cada 100.000 habitantes), lo que supone un aumento del 25,5 % con respecto al mismo período de 2021. El 20 de agosto, una mujer y sus dos hijas fueron quemadas vivas en su vehículo por miembros de una banda en Cité Doudoune, en el municipio de Croix-des-Bouquets (departamento del Oeste).

21. A la grave situación de la seguridad se suma el tráfico ilícito y el desvío de armas pequeñas y armas ligeras y municiones. En julio, la policía realizó cinco grandes incautaciones de armas y municiones. En dos de esas operaciones, la policía, junto con oficiales de aduanas, se incautó de más de 120.000 cartuchos de munición. El 8 de julio, el Fiscal de Port-de-Paix fue destituido y posteriormente detenido en conexión con la liberación de dos sospechosos implicados en la incautación y con la supuesta desaparición de gran parte de la munición confiscada. El 22 de julio se detuvo a un exalto funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que había sido acusado de traficar con armas. El 12 de julio se llevó a cabo otra incautación de armas y municiones ilegales a bordo de un vehículo que se dirigía a la capital desde Port-de-Paix. En Puerto Príncipe, una inspección de los contenedores de carga con suministros para la Iglesia Episcopal de Haití realizada el 14 de julio condujo a la incautación de 14.682 cartuchos. Aunque la investigación sigue su curso, la policía ha efectuado hasta el momento tres detenciones y ha emitido varias órdenes de detención.

22. Con el apoyo de la BINUH, el PNUD y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, las autoridades nacionales finalizaron en agosto el plan de acción nacional destinado a llevar a la práctica la Hoja de Ruta de la CARICOM para Implementar las Acciones Prioritarias del Caribe sobre la Proliferación Ilícita de Armas de Fuego y Municiones en Todo el Caribe de Manera Sostenible para 2030. El PNUD y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) prestaron asistencia a las autoridades en lo relativo al almacenamiento y gestión de armas y municiones. Las Naciones Unidas organizaron en julio un curso de capacitación para 75 agentes de policía (19 de los cuales eran mujeres) sobre gestión de armas y municiones y modernizaron la infraestructura de seguridad de la armería central y del Servicio de Permisos de Armas de Fuego.

23. Atendiendo a una solicitud del Gobierno de Haití y con financiamiento inicial del país, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) desplegó en julio personal para abrir una oficina y comenzar la labor de gestión de las fronteras y para ocuparse del tráfico ilegal, la delincuencia organizada y la recaudación de ingresos del Estado. La UNODC está poniendo en marcha tres actividades de gestión de fronteras: el Programa de Control de Contenedores; el Proyecto de Comunicación Aeroportuaria; y el Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima. Los objetivos del Programa de Control de Contenedores y el Proyecto de Comunicación Aeroportuaria son incrementar la capacidad nacional de

lucha contra el tráfico ilícito y la delincuencia organizada y aumentar la recaudación de ingresos. El objetivo del Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima es ayudar al Servicio de Guardacostas de Haití a aplicar el derecho marítimo. La UNODC, consciente de los vínculos existentes entre la lucha contra la corrupción y la mejora de la seguridad y la estabilidad, puso en marcha, con el apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz y conjuntamente con el PNUD y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), un proyecto de lucha contra la corrupción destinado a prestar apoyo al consenso y la coordinación nacionales en materia de lucha contra la corrupción y centrado en la inclusión de la sociedad civil, las mujeres y los jóvenes. Además, en cooperación con la OEA, la UNODC está poniendo en marcha un proyecto sobre flujos financieros ilícitos.

24. Además de la labor mencionada, algunas entidades de las Naciones Unidas (el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el PNUD y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) siguieron realizando actividades comunitarias en los barrios de Martissant y La Saline de Puerto Príncipe (departamento del Oeste). Dicho programa, que cuenta con el apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz y se realiza en coordinación con el equipo interministerial de tareas para la reducción de la violencia comunitaria, proporciona formación profesional, brinda apoyo a pequeñas microempresas que son propiedad de mujeres y facilita el diálogo a través de plataformas comunitarias.

IV. Seguridad y estado de derecho

25. Las tasas de separación del servicio en la policía nacional siguieron aumentando debido a las dimisiones, las jubilaciones y los fallecimientos, a lo que se sumó el lento ritmo de contratación. De los 14.161 agentes registrados, entre ellos 1.567 mujeres, unos 13.000 estaban en activo al 12 de septiembre. La proporción de policías con respecto a la población se estima en 1,06 policías por cada 1.000 habitantes, por debajo del estándar internacionalmente reconocido de 2,2 por cada 1.000 habitantes. El 23 de julio se puso en marcha un curso de formación básica de siete meses para la 32ª promoción de cadetes de policía, al que se presentaron 725 cadetes para recibir formación, de los cuales 177 eran mujeres (el 24 %). De enero a septiembre de 2022, 17 agentes de policía murieron en actos de servicio, frente a 15 durante el mismo período de 2021, y 16 fueron suspendidos por encontrarse bajo investigación.

26. A pesar de haber recibido un aumento presupuestario del 12 % en el ejercicio fiscal 2021/22, la policía sigue haciendo frente a la creciente inflación y a una gestión presupuestaria inadecuada, lo que se traduce en escasez de equipos y suministros policiales. El reducido número de vehículos policiales y de equipos de protección ha dificultado la capacidad del cuerpo de policía para establecer puestos de control en las zonas controladas por las bandas, como Cité Soleil, donde en julio la policía no fue capaz de proteger los puntos de acceso.

27. Pese a estas dificultades, la policía nacional llevó a cabo una reorganización interna fijada en el plan anual de seguridad de la policía, redactado con el apoyo de la BINUH. La reciente creación de un equipo de tareas contra las bandas, integrado por 150 efectivos, ha mejorado la actuación de la policía y su coordinación interna. Cuando se hayan investigado a fondo los antecedentes de los efectivos, se espera que el equipo de tareas, que puede verse reforzado con donaciones de material y capacitación, aumente a 300 agentes de policía. La policía también está llevando a cabo la aplicación de políticas mejoradas de policía de proximidad comunitaria en todo el país por medio de un “libro blanco” y una directriz normativa elaborados recientemente. A fin de aumentar la retención del personal, el 20 de julio se aprobó

un decreto ministerial por el que se conceden prestaciones a las personas a cargo de los policías que fallezcan o resulten incapacitados en acto de servicio, lo cual fue una de las principales recomendaciones efectuadas en 2020 por la Comisión de Facilitación y Diálogo. También se creó una cooperativa para agentes de policía en la que sus miembros pueden beneficiarse de precios reducidos.

28. La BINUH ha seguido solicitando aportaciones al fondo colectivo de donantes múltiples gestionado por el PNUD, que tiene por objeto financiar la profesionalización de la policía nacional. El fondo, que aspira a obtener 28 millones de dólares en donaciones, ha recibido hasta el momento unos 11 millones de dólares. El 23 de septiembre, los asociados internacionales de Haití organizaron un acto paralelo durante la semana de alto nivel del septuagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General. Para reforzar la integridad de la policía y aumentar su capacidad de intervención guiada por la inteligencia, la BINUH y el PNUD están prestando asistencia a la policía para dar prioridad a dos proyectos clave sobre investigación de antecedentes de los futuros agentes y sobre recopilación de datos de inteligencia. La contratación en curso de 12 nuevos miembros de personal civil y en comisión de servicio para la dependencia de policía y asuntos penitenciarios de la BINUH, encomendada en la resolución [2645 \(2022\)](#) del Consejo de Seguridad, aumentará la capacidad de la misión para dar más apoyo al desarrollo del cuerpo de policía.

29. La BINUH facilitó asistencia técnica a la comisión especial creada el 2 de mayo por la Dirección Central de la Policía Judicial para llevar a cabo investigaciones sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos durante los actos de violencia que tuvieron lugar en abril y mayo de 2022. Las Naciones Unidas brindaron apoyo al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y a los magistrados haitianos para celebrar del 9 al 11 de agosto una conferencia internacional para más de 150 funcionarios de la administración de justicia sobre la creación de equipos de tareas judiciales especializados encargados de los delitos sexuales, los delitos financieros y la violencia urbana.

30. Tras el asalto y la ocupación del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe por bandas fuertemente armadas, ocurridos el 10 de junio, se celebraron varias audiencias urgentes en otros lugares. No se ha encontrado una solución a más largo plazo para reubicar el Tribunal. Aunque las vistas penales se reanudaron en el Tribunal de Primera Instancia de Croix-des-Bouquets, con apoyo técnico y equipo proporcionados por las Naciones Unidas, esta labor se vio temporalmente truncada cuando una banda armada prendió fuego a la Fiscalía el 25 de julio, supuestamente como represalia por las operaciones policiales. Posteriormente, el Tribunal se reubicó temporalmente en la biblioteca municipal de Tabarre. Como hecho positivo, el Tribunal de Primera Instancia de Los Cayos (departamento del Sur) celebró vistas penales en una nueva sala en la prisión de Los Cayos, a pesar de la huelga que los fiscales adjuntos mantienen desde abril.

31. El empoderamiento de las mujeres en el sector judicial sigue constituyendo un reto. En mayo y junio, la BINUH mantuvo varias reuniones bilaterales con mujeres destacadas del sector de la justicia, y el 12 de julio acogió un debate sobre la forma de abordar los retos y la discriminación. Está previsto realizar una serie de tres talleres sobre liderazgo dirigidos a abogadas y magistradas en los próximos meses.

32. La entrada en vigor del nuevo código penal y del código de procedimiento penal se pospuso dos años más en virtud de un decreto del Consejo de Ministros emitido el 22 de junio. El aplazamiento permitiría que el Gobierno y los especialistas examinaran algunas disposiciones, llevaran a cabo actividades de sensibilización y formación y redactaran decretos complementarios de aplicación.

33. Como parte de los esfuerzos que se están llevando a cabo para reducir la prisión preventiva prolongada, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública aprobó un plan de acción sobre inspección judicial con el fin de aumentar la rendición de cuentas del personal de la administración de justicia y mejorar el funcionamiento de los tribunales. Paralelamente, el Consejo Nacional de Asistencia Jurídica celebró el 15 de junio, con el apoyo técnico y financiero de las Naciones Unidas, un foro en el que participaron 75 personas destinado a ayudar a definir las mejores prácticas y a armonizar la prestación de asistencia letrada.

34. Las cárceles de Haití siguen estando superpobladas, son insalubres y carecen de servicios suficientes. Al 28 de septiembre, las prisiones haitianas albergaban a 11.788 reclusos, de los cuales 308 eran mujeres, 266 niños y 10 niñas, y la tasa de ocupación general estimada era del 294 %; del total de reclusos, 9.861 reclusos (el 83,7 %) estaban a la espera de juicio. Las condiciones de detención en todo el país siguieron deteriorándose y se veían agravadas por el insuficiente presupuesto asignado al sistema penitenciario, la escasez de alimentos, los limitados suministros médicos y los retrasos en el traslado de los reclusos a los hospitales, que a menudo provocaban muertes evitables. Las paradas cardiopulmonares, la tuberculosis y la anemia causada por la desnutrición siguen siendo, según las autoridades, las tres principales causas de muerte en las cárceles haitianas. Las dificultades de acceso provocadas por la crisis de seguridad que estalló el 11 de septiembre empeoraron aún más la situación, y las autoridades penitenciarias notificaron 19 muertes entre el 11 y el 30 de septiembre. Recientemente se han confirmado nueve muertes por cólera en la Penitenciaría Nacional desde el 1 de octubre.

35. A lo largo de julio y agosto, las autoridades penitenciarias tuvieron dificultades para suministrar las comidas diarias a los detenidos debido a la creciente inflación y a los conflictos contractuales con los proveedores de alimentos por el pago de atrasos. Las organizaciones no gubernamentales contribuyeron a paliar en parte la situación mediante donaciones de alimentos. El 29 de junio comenzó a circular en las redes sociales un video que mostraba a presos demacrados en Cabo Haitiano (departamento del Norte), tras lo cual el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, en una visita realizada el 1 de julio a la prisión, ordenó la liberación por motivos humanitarios de 37 reclusos acusados de delitos leves. Asimismo, las autoridades de Los Cayos (departamento del Sur) pusieron en libertad a 40 presos poco tiempo después. La escasez sistemática de alimentos y agua se vio agudizada por la crisis de seguridad desatada el 11 de septiembre, ya que las barricadas bloqueaban el acceso a muchas prisiones, impidiendo la entrega de suministros. Al 22 de septiembre, las prisiones de Cabaret (departamento del Oeste) y Jérémie (departamento de Grande-Anse) no disponían de agua, alimentos ni gas para cocinar.

36. La crisis de septiembre también aumentó los riesgos de seguridad debido tanto al absentismo del personal como a la dificultad para acceder a los centros penitenciarios, por lo que muchas prisiones estuvieron atendidas solamente por unos cuantos miembros del personal. El 22 de septiembre, la grave falta de personal dio lugar a una fuga masiva de la cárcel de mujeres de Cabaret (departamento del Oeste), en la que 145 reclusas se fugaron tras atar a los tres únicos funcionarios de prisiones que atendían la instalación, que habían permanecido en sus puestos de forma ininterrumpida desde el 11 de septiembre.

37. Con una media de 0,33 m² de superficie por recluso, muy por debajo de la norma internacional de 3,4 m², el hacinamiento sigue favoreciendo la propagación de enfermedades en las cárceles. Haití sigue figurando entre los países con más bajas tasas de vacunación contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19), con un 1,14 % de la población vacunada. A este respecto, el programa de vacunación contra la COVID-19 en las prisiones, que se había preparado a principios de 2022, no llegó a

ponerse en marcha debido a la falta de coordinación entre las autoridades de salud pública y las penitenciarias. La falta de análisis adecuados impidió que las autoridades establecieran la causa de la muerte de 97 reclusos que fallecieron en los primeros seis meses de 2022. También está en riesgo la continuidad del tratamiento contra el VIH debido a la falta de alimentación adecuada y a la carencia de los medicamentos antirretrovirales necesarios.

V. Derechos humanos

38. El aumento de la intensidad y la frecuencia de los ataques de bandas fuertemente armadas ha hecho que la situación de los derechos humanos en el país se deteriore aún más. La violencia armada alcanzó niveles sin precedentes en los municipios marginados situados al oeste y al norte del área metropolitana de Puerto Príncipe y en el departamento de Artibonito. La población local ha dejado de ser simplemente una víctima colateral de los enfrentamientos armados, y cada vez con más frecuencia ha pasado a convertirse en objetivo directo de las bandas. Siguiendo un nuevo *modus operandi*, los elementos armados asesinan, hieren y cometen actos de violencia sexual deliberadamente durante ataques coordinados destinados a ampliar su control territorial en la capital del país.

39. Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2022, el Servicio de Derechos Humanos de la BINUH documentó 1.377 asesinatos, lesiones y desapariciones (1.171 hombres, 153 mujeres y 53 niños) ocurridos durante los enfrentamientos armados entre la policía y las bandas y en los ataques contra la población perpetrados por las bandas que operan en la zona metropolitana de Puerto Príncipe (Pont Rouge, Wharf Jérémie, Cité Soleil, Bel-Air, Delmas y Croix-des-Bouquets) y en el departamento de Artibonito (Savien y Gros-Morne). Tras los enfrentamientos entre bandas que tuvieron lugar en Cité Soleil entre el 8 y el 17 de julio, más de 3.886 personas —de las cuales al menos 700 eran niños no acompañados— se vieron obligadas a abandonar sus hogares y a buscar refugio temporal en lugares improvisados en otras zonas. De ellos, unos 600 regresaron a Cité Soleil durante un período de calma en los enfrentamientos entre las coaliciones de bandas enfrentadas, y los niños se reunieron con sus padres a finales de agosto. El resto de las personas permanecen en un sitio improvisado para desplazados internos ubicado en el parque Hugo Chávez, donde se ven afectados por la desnutrición y están expuestos a enfermedades. Además de causar esos desplazamientos, los miembros de las bandas incendiaron o destruyeron unas 140 viviendas en un intento deliberado de castigar a los lugareños que eran considerados partidarios de las bandas rivales. A causa de la violencia, los centros de salud, las escuelas, los negocios y otros servicios en las zonas afectadas se vieron obligados a cerrar.

40. Durante los enfrentamientos ocurridos en julio en Cité Soleil, los miembros de las bandas adoptaron un método de actuación consistente en atacar deliberadamente a las poblaciones locales que vivían bajo el control de las bandas rivales, principalmente en el barrio de Brooklyn. Los miembros de la banda, armados con fusiles de asalto, dispararon indiscriminadamente contra los residentes, incluidos mujeres y niños, en sus hogares y en la calle. Varios residentes, entre ellos enfermos, discapacitados y ancianos, fueron quemados vivos en sus casas. Se informó de que 44 personas fueron víctimas de ejecuciones sumarias a manos de las bandas tras ser interceptadas cuando intentaban escapar de la violencia en Cité Soleil o buscaban refugio o atención médica en otras partes de Puerto Príncipe.

41. Las bandas bloquearon las carreteras de acceso a Cité Soleil, impidiendo que las ambulancias y el personal médico, incluido el de organizaciones humanitarias, accedieran a la zona, lo que limitó la capacidad de tratar y evacuar a los heridos.

Muchas de las víctimas murieron porque no se pudo llegar a ellas. Además, las bandas, especialmente las pertenecientes a la coalición de la zona centro de Puerto Príncipe, bloquearon las principales carreteras que conectan el barrio de Brooklyn de Cité Soleil con el resto de la capital para impedir tanto el acceso de la población local a los mercados locales como la entrada de mercancías en la zona. Al parecer, se trató de un intento deliberado de provocar inseguridad alimentaria y limitar el acceso al agua para hacerse con nuevo territorio, utilizando tales actos con el propósito de coaccionar a la población local para que se enfrentara a una coalición rival que controlaba la zona en la que vivían, a fin de ayudar a eliminar a las bandas rivales del territorio.

42. Durante estos enfrentamientos, las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+ estuvieron especialmente expuestas a la violencia sexual perpetrada por las bandas, si bien los hombres y los niños también fueron objeto de ataques. Los datos recogidos por la BINUH indican que las bandas han seguido utilizando deliberadamente la violencia sexual para aterrorizar y someter a la población. Al menos 57 mujeres y niñas fueron violadas, ya fuera en sus casas, de camino al trabajo, mientras hacían recados domésticos o cuando intentaban huir de la zona. En algunos casos, los actos de violencia sexual se produjeron delante de los hijos y las parejas de las víctimas. Un ejemplo que ilustra el grado de brutalidad alcanzado por las bandas es el caso de una mujer de 25 años que fue violada repetidamente sobre el cadáver de su marido por miembros de una banda, delante de sus tres hijos, antes de que prendieran fuego a la casa. Las víctimas de la violencia sexual han sufrido increíbles daños físicos y mentales, y algunas llegaron a ser mutiladas o ejecutadas tras ser violadas. La violencia sexual sin protección también expone a todas las víctimas al riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Los días 21 y 22 de julio, con el fin de reforzar la respuesta multisectorial a los alarmantes índices de violencia sexual, la BINUH organizó una mesa redonda con representantes de unas 70 instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil encargadas de prevenir la violencia sexual y de prestar servicios psicomédicos y socioeconómicos a las víctimas y sus familias. Los debates mantenidos durante la mesa redonda permitieron elaborar una hoja de ruta para ofrecer una respuesta sectorial.

43. En colaboración con la sociedad civil, el ACNUDH está coordinando una respuesta multisectorial para las personas reconocidas como víctimas de la violencia sexual, aunque resulte significativo que ninguna de ellas haya solicitado asistencia jurídica por temor a las represalias y a la estigmatización. Como apoyo, la Iniciativa Spotlight, una asociación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas cuyo objetivo es eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, ha facilitado asistencia técnica para la creación de capacidad a los principales ministerios y municipios a fin de consolidar la respuesta institucional. Además de prestar apoyo médico y psicosocial a las víctimas, la Iniciativa ha proporcionado educación a la comunidad y programas de formación específicos de generación de ingresos para promover el empoderamiento económico de las víctimas, en particular de las discapacitadas.

44. La violencia armada vinculada a las bandas ha tenido consecuencias devastadoras para los niños. Muchos niños murieron o resultaron heridos por el fuego cruzado mientras estaban en sus casas, en la escuela o en la calle. Los niños y las niñas suelen ser coaccionados para que se unan a las bandas o participen en sus actividades. Los miembros de las bandas suelen ofrecer dinero o comida a los niños vulnerables para que ingresen en sus bandas y los amenazan con tomar represalias contra sus familias si se niegan a hacerlo.

45. Las bandas tuvieron una repercusión negativa en las economías locales como consecuencia de la extorsión, el cobro de impuestos ilegales y la perturbación de las

cadena logística y de suministro. Desde mediados de junio, las bandas armadas atacan las barcas atracadas en la zona centro de Puerto Príncipe para obligar a los comerciantes a transportar por carretera mercancías que tenían como destino los departamentos del sur de Haití, donde las bandas les obligan a pagar un “impuesto de tránsito”. En julio, la violencia de las bandas en Cité Soleil también interrumpió la distribución de combustible procedente de las principales terminales de combustible del país durante casi una semana, desencadenando violentas protestas de los ciudadanos en toda la capital.

46. No se avanzó en las investigaciones de las masacres de La Saline (2018) y Bel Air (2019), ni en la del asesinato de Monferrier Dorval (2020), antiguo jefe del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe. Las investigaciones sobre el asesinato del ex-Presidente, Jovenel Moïse, llevadas a cabo por el sistema de justicia haitiano tampoco han producido resultados significativos. A pesar de que el 30 de mayo se nombró a un quinto juez de instrucción y de que se celebraron una serie de vistas con los sospechosos detenidos, tanto los autores intelectuales del crimen como los ejecutores del mismo y sus cómplices siguen en libertad. Mientras tanto, el plazo legal para la realización de la investigación ha expirado sin que el juez haya emitido su declaración de constataciones.

47. En el marco de su continua labor de lucha contra la impunidad, la BINUH publicó el 1 de agosto un informe en el que se detallaban los abusos contra los derechos humanos cometidos durante la ola de violencia que tuvo lugar entre el 24 de abril y el 16 de mayo y que causó 322 bajas civiles en los municipios de Cité Soleil, Croix-des-Bouquets y Tabarre (departamento del Oeste). En el informe, la BINUH determinó la forma en que las dos principales coaliciones de bandas estaban implicadas en abusos atroces contra la población, incluso contra niños de apenas 1 año de edad. Además, el informe ofrecía una serie de recomendaciones dirigidas a la policía, a la judicatura y a otras autoridades encargadas de prestar apoyo a las víctimas y de investigar los delitos.

48. La BINUH siguió brindando apoyo a la Inspección General de la Policía Nacional para que investigara las violaciones de derechos humanos en conexión con el uso excesivo de la fuerza o las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de policía. Un total de 51 personas murieron en el transcurso de operaciones policiales, y la Inspección General abrió 47 investigaciones, 4 de ellas por ejecuciones sumarias. Tras las manifestaciones de septiembre, en las que las medidas policiales para dispersar a la multitud provocaron lesiones a varias docenas de manifestantes, entre ellos tres periodistas, la Inspección General inició una investigación sobre el presunto uso de munición activa. El 31 de agosto, la Inspección General finalizó sus investigaciones sobre 15 casos anteriores ocurridos entre 2019 y 2022 y remitió sus recomendaciones al Director General Interino de la Policía Nacional. Hasta la fecha se han llevado a cabo muy pocas investigaciones sobre el asesinato de presuntos miembros de bandas durante las operaciones policiales.

VI. Desempleo, juventud y otros grupos vulnerables

49. El descenso del nivel de vida sigue socavando los modestos avances conseguidos en materia de desarrollo y obstaculizando los progresos realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los haitianos se enfrentan a una inflación galopante que alcanzó el 30,5 % en julio. Los ingresos tributarios se desplomaron en los últimos años debido a la presión provocada por el malestar social, a los problemas de recaudación y a la crisis de seguridad; sin embargo, las autoridades nacionales prevén un ligero aumento de estos ingresos como consecuencia de las nuevas medidas administrativas y del restablecimiento de los flujos de remesas.

Mientras tanto, la falta de avances en las principales prioridades de desarrollo, incluidas las oportunidades de trabajo decente para todos y el suministro de servicios básicos como el agua potable, está agravando aún más la inestabilidad y la incertidumbre.

50. El 17 de junio de 2022 se aprobó un programa supervisado por el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), diseñado por el FMI y las autoridades haitianas, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2023. El programa obedece al propósito de ayudar al Gobierno a restablecer la estabilidad macroeconómica y a reducir la inflación, un objetivo clave dada la pesada carga que la inflación supone para los pobres. También da prioridad a la mejora de la gobernanza en el sector público, la movilización de los ingresos internos, la creación de capacidad y la promoción del gasto social.

51. El combustible empezó a escasear en julio, cuando las bandas impidieron que los camiones salieran de las principales terminales marítimas de Haití, lo que afectó gravemente al país. Muchos negocios cerraron y las calles quedaron vacías, mientras las autoridades luchaban contra la proliferación del mercado negro y los haitianos de a pie se enfrentaban a precios exorbitantes y a condiciones en ocasiones peligrosas para conseguir gasolina. La nueva racha de escasez se atribuyó al retraso en el pago por parte del Gobierno de los subsidios a los principales distribuidores de combustible del país, a su vez exacerbado por la rápida depreciación de la moneda y los altos niveles de inflación. Se estima que casi un tercio de los ingresos nacionales de Haití se dedican al régimen regresivo de subsidios al combustible de Haití, con lo que se excluye la posibilidad de realizar inversiones en salud, educación y otros servicios sociales. Según el FMI, estos subsidios no son equitativos, ya que más del 90 % de los beneficios van a parar en manos de entre el 10 % y el 20 % de los que más ganan. En los discursos que dirigió a la nación el 20 de julio y el 11 y el 18 de septiembre, el Primer Ministro reafirmó la intención del Gobierno de ajustar el régimen de subsidios a los combustibles, conforme a la recomendación del programa supervisado por el personal del FMI, y de estabilizar el suministro nacional de combustible. Sin embargo, aparte de una primera serie de medidas adoptadas en abril y dirigidas a los grupos más afectados por los ajustes del precio del combustible, todavía no se han aplicado medidas adicionales. El 18 de septiembre, el Gobierno estableció con efecto inmediato nuevos precios fijos de los combustibles en las gasolineras, a fin de compensar parcialmente el importe de los subsidios pagados directamente al mercado intermediario.

52. La actividad económica en todo el país se ha visto gravemente afectada por la violencia generalizada de las bandas en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Los agricultores del sur no han podido trasladar sus cosechas estacionales a los mercados centrales del país debido a que las bandas habían obstruido las principales vías de acceso a la capital. También se han interrumpido en repetidas ocasiones las rutas clave hacia el norte. Los elevados precios de los productos básicos y de los alimentos, que aumentaron debido en parte a las perturbaciones de las cadenas mundiales de suministro, están afectando de manera desproporcionada a las personas más vulnerables de Haití.

53. La disminución de las remesas, que ascendieron a 2.900 millones de dólares entre octubre de 2021 y julio de 2022, frente a los 3.000 millones de dólares del mismo período del año anterior, agravó aún más la situación económica. Además, el aumento de la inflación sigue socavando el poder adquisitivo de muchos haitianos. Los niveles de pobreza están elevándose a medida que los indicadores de desarrollo humano empeoran, y, según las estimaciones, es probable que el 58 % de la población se encuentre por debajo del umbral de pobreza a finales de septiembre de 2022, cuando concluya el ejercicio fiscal.

54. Las demandas de protección social, especialmente por parte de los más vulnerables, se han multiplicado, aunque faltan datos que permitan captar la dimensión exacta del problema. La agricultura y los agronegocios siguen ofreciendo el potencial más inmediato para hacer frente al elevado desempleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, y para mejorar la resiliencia ante las perturbaciones económicas. El equipo de las Naciones Unidas en el país, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria, prestó apoyo a un plan multisectorial para poner en marcha la política nacional de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutrición. Las Naciones Unidas también están contribuyendo a aplicar de modo efectivo la política nacional de protección social, aprobada en 2020, mediante la elaboración de un plan de acción nacional que comprende la atención sanitaria, las transferencias de efectivo, la educación, el empleo, la capacitación laboral, los servicios sociales y las reformas institucionales para crear un sistema de protección social basado en los derechos. El Gobierno asignó 30 millones de dólares del presupuesto nacional correspondiente al ejercicio 2021/22 en apoyo del plan.

VII. Prestación de servicios sociales básicos y resiliencia

55. Las crisis múltiples y superpuestas derivadas de la inseguridad, la inestabilidad política y los desastres naturales provocaron el aumento de las necesidades humanitarias, obstaculizando el progreso hacia el desarrollo a largo plazo. La inseguridad y la violencia alimentadas por las bandas beligerantes impidieron el acceso a la ayuda humanitaria en Puerto Príncipe y sus alrededores. La inseguridad desestabilizó los medios de vida y socavó el acceso a los servicios esenciales, agudizando las vulnerabilidades en una situación ya caracterizada por la inflación, la escasez de combustible y la lenta recuperación tras el terremoto.

56. Un millón y medio de personas, casi la mitad de la población de Puerto Príncipe, se han visto afectadas directamente por la reciente violencia de las bandas. Miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, y cientos de niños han quedado separados de sus familias o sin compañía. En octubre de 2022, 21.684 personas (unos 6.000 hogares) de la zona metropolitana de Puerto Príncipe se encontraban desplazadas en 36 emplazamientos distribuidos por toda la capital. Además, unas 66.000 personas desplazadas residen con familias de acogida en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Más de 1.700 escuelas en zonas controladas por las bandas han sido cerradas temporal o completamente, privando a más de 500.000 niños de su derecho a la educación.

57. Las deportaciones se han duplicado. Hasta el 30 de septiembre de 2022, más de 21.215 migrantes haitianos habían sido repatriados a lo largo del año por vía aérea y marítima, frente a los 10.152 de 2021. Entre el 16 de julio y el 10 de octubre de 2022, 1.857 fueron migrantes haitianos devueltos por la fuerza a Haití desde las Bahamas, Cuba, los Estados Unidos de América y las Islas Turcas y Caicos. Según la organización haitiana Grupo de Apoyo a los Retornados y Refugiados, durante el mes de julio más de 18.000 haitianos fueron repatriados o devueltos por tierra desde la República Dominicana, y otros 16.600 en agosto, en pasos fronterizos tanto oficiales como no oficiales. La OIM estima que, a pesar del empeoramiento de la situación de la seguridad en el país, en septiembre se repatrió a más de 7.000 personas desde la República Dominicana a la zona fronteriza con Haití. Gracias a una operación en la que colaboraron las autoridades turcas, la Oficina Nacional de Migración de Haití y el Defensor del Pueblo haitiano y que contó con el apoyo de la OIM, se consiguió que el 28 de julio regresara al país un grupo de 301 migrantes haitianos a los que agencias sin escrúpulos habían prometido oportunidades de trabajo. Alrededor de 1.000 haitianos que se encuentran en Türkiye están solicitando un apoyo similar.

58. Según el informe correspondiente al mes de marzo de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), se calcula que 4,5 millones de personas se encontraban en situación de inseguridad alimentaria aguda. Actualmente la CIF está realizando un nuevo análisis, y se espera que las cifras aumenten considerablemente. Al menos 5,6 millones de personas están recurriendo a estrategias de afrontamiento a la crisis para poder subsistir. La violencia continuada de las bandas en el área metropolitana de Puerto Príncipe y el aumento del malestar social están intensificando la persistencia de la malnutrición. En una evaluación reciente realizada en Cité Soleil se puso de manifiesto que el 20 % de los niños menores de 5 años de edad padecen malnutrición aguda; asimismo, se está realizando una encuesta sobre nutrición en todo el país. Los alarmantes niveles de malnutrición también ponen en peligro los logros alcanzados con gran esfuerzo por el programa nacional contra el VIH, provocando interrupciones en los tratamientos que probablemente conduzcan a una mayor resistencia a los medicamentos y a los consiguientes repuntes en los niveles de infección por el VIH, especialmente entre los jóvenes, las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.

59. En julio, equipos multiinstitucionales de las Naciones Unidas empezaron a entregar ayuda vital a las comunidades de Cité Soleil, uno de los municipios más pobres y con más pandillas de Puerto Príncipe. Para afrontar mejor las necesidades básicas inmediatas en estas zonas, las Naciones Unidas están aumentando su capacidad a fin de poder realizar una mejor vigilancia y análisis y de consolidar estrategias que permitan un mayor acceso a la ayuda humanitaria. Paralelamente, a fin de atender las necesidades humanitarias inmediatas y contribuir al mismo tiempo a reducir la violencia, restablecer los servicios sociales y crear un entorno de estabilidad y cohesión social, las Naciones Unidas prosiguen su labor para proporcionar una respuesta amplia mediante la prestación de servicios de atención sanitaria, educación, protección de la infancia y apoyo a las víctimas de la violencia sexual y de género.

60. La reciente ola de disturbios civiles, con la que comenzó la paralización del país el 12 de septiembre, ha obstaculizado aún más el acceso de la población de Haití a los servicios básicos, acentúa sus vulnerabilidades e impone serias limitaciones a los agentes humanitarios. Los asociados humanitarios han tenido dificultades para acceder a los beneficiarios en los campamentos de desplazados internos y proporcionarles agua, saneamiento, alimentos y atención sanitaria. El acceso a los servicios sanitarios se ha visto aún más restringido por las limitaciones de circulación, y las instalaciones médicas también han resultado especialmente afectadas por las fluctuaciones en el suministro de agua y electricidad. Además, varios almacenes pertenecientes a asociados humanitarios y entidades de las Naciones Unidas han sido saqueados por los manifestantes, lo que ha suscitado gran inquietud en cuanto a si habrá suficiente capacidad humanitaria para satisfacer unas necesidades cada vez mayores.

61. Después de más de tres años sin que se registrara un solo caso, el 2 de octubre se confirmaron dos casos de cólera en Haití, lo que parece indicar que la grave situación también ha contribuido a la aparición del cólera en el país. Al 11 de octubre, las autoridades sanitarias de Haití habían notificado 32 casos confirmados, 18 muertes en hospitales, 215 casos sospechosos hospitalizados y 266 casos sospechosos en total. Los casos se determinaron utilizando el mecanismo de vigilancia del cólera, creado por las autoridades haitianas y respaldado por las Naciones Unidas. Los primeros casos se detectaron en Cité Soleil y Carrefour Feuilles, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, aunque también se han encontrado casos sospechosos en el departamento del Centro.

62. Los esfuerzos del Gobierno, apoyados por las Naciones Unidas y los asociados nacionales e internacionales, se centran en limitar la propagación de la enfermedad, atender a los pacientes e informar a la población sobre medidas preventivas y métodos de actuación inmediata que permiten salvar vidas. Se prestará apoyo adicional a la ampliación de la vigilancia, el aumento del suministro de agua y saneamiento, el establecimiento de centros de tratamiento del cólera y la mejora de la gestión de los casos.

63. Pese al aumento de las necesidades, la financiación de la respuesta humanitaria que se brinda al país sigue siendo muy insuficiente. Al 11 de octubre, la financiación humanitaria ascendía a 103 millones de dólares, incluidos 8,5 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencias, lo que representa un tercio de la financiación necesaria para el plan de respuesta humanitaria de 2022, estimada en 373,2 millones de dólares. El mecanismo de respuesta rápida del Fondo también acordó proporcionar 5 millones de dólares para financiar asistencia vital en Cité Soleil tras los violentos enfrentamientos entre bandas ocurridos en julio de 2022, y 7 millones en apoyo de la respuesta al brote de cólera detectado en octubre de 2022.

64. Se sigue suministrando asistencia humanitaria a los supervivientes del terremoto ocurrido el 14 de agosto de 2021. Un año después del desastre, la ayuda ha alcanzado a más de 484.000 personas, entre ellas 21.700 desplazados y 116.300 personas que se encuentran en zonas de difícil acceso. Los esfuerzos de reconstrucción en la península sur posteriores al terremoto se han visto obstaculizados por la actividad de las bandas que bloquean la carretera desde Puerto Príncipe hacia el sur. Como consecuencia, sigue habiendo 2.528 personas desplazadas en el sur de las 35.000 originalmente desplazadas tras el terremoto. Más de 1.200 escuelas de los departamentos del Sur, Grande-Anse y Nippes, los más afectados por el terremoto, aún no han sido reconstruidas, por lo que se calcula que 340.000 niños siguen careciendo de un entorno de aprendizaje adecuado, y algunos de ellos no pueden acceder en absoluto a la educación. A fin de ayudar a intensificar los esfuerzos de respuesta, el Gobierno de Haití reunió el 2 de junio a un comité de eficacia de la ayuda en el que se debatieron los principales pilares del marco de reconstrucción y recuperación.

65. Dado que las crisis a las que se enfrenta el país son múltiples, el Ministerio de Educación y Formación Profesional pospuso el inicio del año escolar un mes, hasta el 3 de octubre, objetivo que tendrá que ser pospuesto nuevamente. No obstante, cuando las circunstancias lo permitan, el Ministerio se propone reabrir las escuelas progresivamente y en las zonas menos afectadas por la crisis. Como preparación para el año escolar 2022/23, se procedió a almacenar alimentos para que hubiera comidas escolares a punto. Aunque las reservas de alimentos dedicadas a la alimentación de aproximadamente 1.650 escuelas se perdieron en el saqueo del almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Gonaïves, el PMA sigue restableciendo su capacidad para asegurar que los niños reciban comidas escolares durante todo el año. La iniciativa de comidas escolares es el mayor programa de red de protección social en Haití y representa un servicio esencial ante el deterioro de las condiciones de seguridad alimentaria. Además, las Naciones Unidas siguen prestando apoyo al Ministerio en la labor de reconstrucción y reapertura tanto de las escuelas ubicadas en las zonas dañadas por el terremoto de agosto de 2021 como de las escuelas afectadas por la violencia de las bandas en los alrededores de Puerto Príncipe.

66. La mayoría de los alimentos que se sirven en las escuelas son importados, pero las cadenas de valor alimentarias a nivel local encierran un gran potencial. Las Naciones Unidas están tratando de organizar a los productores locales y de aumentar la productividad agrícola a fin de revitalizar la agricultura a pequeña escala y fortalecer las cadenas de valor locales. Además de aumentar el suministro de alimentos frescos y nutritivos que se ajusten a las preferencias locales, el

fortalecimiento de las cadenas de valor alimentarias locales puede contribuir a incrementar los ingresos de las pequeñas comerciantes tradicionales, que constituyen un pilar fundamental de las economías locales.

67. Las entidades de las Naciones Unidas y sus asociados han intensificado las labores de preparación y respuesta prestando apoyo a los centros de salud y a la gobernanza sanitaria y desplegando clínicas móviles. También se han actualizado y completado recientemente dos documentos estratégicos de políticas de gran importancia, el plan estratégico de salud comunitaria para el período 2020-2030 y la evaluación de las instalaciones sanitarias en las zonas urbanas para el área metropolitana de Puerto Príncipe, que están sirviendo para orientar las acciones del Gobierno en materia de salud pública.

VIII. Explotación y abusos sexuales

68. Durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2022, la BINUH no registró ninguna nueva denuncia de casos de explotación y abusos sexuales en los que el personal de misiones pasadas o presentes estuviera implicado.

69. Bajo la dirección de la Representante Especial Adjunta del Secretario General, el Coordinador Residente y el Coordinador de Asuntos Humanitarios, los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas continuaron realizando progresos para finalizar las vías de remisión de las víctimas. El coordinador de todo el sistema sobre la protección contra la explotación y los abusos sexuales siguió participando en actividades de sensibilización, para lo cual organizó tres reuniones dirigidas a funcionarios del Gobierno de Haití y representantes de la sociedad civil.

70. La Defensora de las Naciones Unidas para los Derechos de las Víctimas, acompañada por la Oficial Superior de Derechos de las Víctimas y un oficial jurídico de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, visitó dos Estados Miembros entre el 20 y el 30 de junio con el fin de solicitar sus buenos oficios para resolver las demandas pendientes de paternidad y de manutención de los niños nacidos como consecuencia de la explotación y el abuso sexuales. La Oficial Superior de Derechos de las Víctimas siguió dando apoyo al PNUD para atender a las madres y a sus hijos nacidos de incidentes de explotación y abusos sexuales cometidos por el personal de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Del 18 al 21 de julio de 2022, la Oficial Superior de Derechos de las Víctimas visitó los departamentos del Sur y de Grande-Anse para reunirse con las madres que no podían viajar a Puerto Príncipe a causa de la inseguridad. Conforme las condiciones de seguridad en el país han ido empeorando, se ha hecho extremadamente difícil prestar apoyo a las madres, e incluso mantener contacto con ellas.

IX. Observaciones

71. En este momento de crisis sin precedentes, Haití necesita urgentemente que haya unidad para realizar avances con respecto a todos los desafíos multidimensionales a los que se enfrenta. Ante todo, insto a todos los haitianos a que no escatimen esfuerzos para fomentar el diálogo a fin de lograr una solución que sea dirigida y asumida por los haitianos y que abarque todos los aspectos de la situación —desde las cuestiones constitucionales hasta las de seguridad— y conduzca al pleno restablecimiento de las instituciones democráticas en 2023. También aguardo con interés la información actualizada sobre el proceso político y la labor realizada para alcanzar un acuerdo que el Gobierno debe presentar al Consejo de Seguridad a más tardar el 17 de octubre de 2022, como solicitó el Consejo en su resolución [2645 \(2022\)](#).

72. Condeno la oleada de violencia de los últimos meses, que se ha cobrado un gran número de víctimas entre la población civil, especialmente entre quienes viven en condiciones de pobreza extrema. Aunque se están llevando a cabo iniciativas para mejorar la capacidad de las fuerzas de seguridad y hacer frente a la violencia comunitaria, se debe hacer más para luchar contra la impunidad de las bandas armadas y de quienes las respaldan. Los ataques a las instituciones del Estado deben cesar inmediatamente. Condeno enérgicamente las informaciones sobre la violencia sexual generalizada de las bandas armadas. Los autores de estos crímenes atroces deben rendir cuentas. Además, quisiera expresar mi consternación por los ataques contra las instalaciones y los suministros humanitarios. Nuestros asociados humanitarios deben ser protegidos. Insto a las autoridades haitianas a que garanticen el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y a que velen por que la ayuda humanitaria pueda acceder a las comunidades asoladas por la violencia.

73. Estoy profundamente preocupado por la irrupción del cólera, cuya aparición se produce en un momento en el que las poblaciones más vulnerables se enfrentan ya a unas duras condiciones humanitarias, lo que agudiza aún más la vulnerabilidad y las necesidades de la población. El bloqueo de la terminal de Varreux, principal punto de entrada de combustible en Haití, sigue siendo una importante causa de alarma. El llamamiento realizado el 6 de octubre por las Naciones Unidas para que se abriera inmediatamente un corredor humanitario que permitiera que el combustible llegara a los hospitales y a las instalaciones de tratamiento de agua debe ser escuchado.

74. Me sigue preocupando enormemente el hecho de que los presos de todo el país hayan pasado hambre y que algunas prisiones se hayan quedado sin alimento alguno durante la crisis. La prisión preventiva, que desde hace tiempo se encuentra en un estado deplorable, y sus nefastas consecuencias en cuanto al hacinamiento y las condiciones carcelarias, siguen constituyendo graves problemas para el sistema penitenciario, lo que es especialmente grave en un contexto de reaparición del cólera. Exhorto nuevamente al Gobierno a que aumente su apoyo al sistema nacional de justicia y vele por que las instituciones judiciales y penitenciarias cuenten con los recursos necesarios para que tanto el personal penitenciario como los reclusos se encuentren en condiciones seguras y adecuadas. Es necesario que se realicen más esfuerzos por solucionar de manera sostenible este problema que viene existiendo desde hace tiempo, entre otras cosas, revisando el mecanismo de gestión presupuestaria de las prisiones y asegurando que los juicios se lleven a cabo en un plazo razonable.

75. Es indispensable que se apoyen tanto los esfuerzos del Gobierno para asegurar que la policía nacional disponga de los medios necesarios para contrarrestar la violencia de las bandas como las medidas para crear una mayor cohesión y capacidad operativa en el seno del cuerpo. Junto con los resultados obtenidos, también es fundamental que las autoridades nacionales adopten estrategias multifacéticas e integrales a nivel político e institucional para reducir la violencia, con el objetivo de proporcionar no solo una seguridad absolutamente necesaria a las comunidades afectadas por la violencia, sino también alternativas socioeconómicas para las comunidades en riesgo y protección para los más vulnerables, especialmente las mujeres y los jóvenes. Insto al Gobierno a que intensifique su labor en estos ámbitos, que se refuerzan mutuamente, y a que aproveche plenamente el apoyo de los Estados Miembros, del sistema de las Naciones Unidas y de los asociados regionales e internacionales. Para lograr resultados y aprovechar al máximo el impacto sobre el terreno, es imprescindible que tales esfuerzos estén bien coordinados y cuenten con una financiación constante, en particular con el apoyo de la comunidad internacional.

76. A este respecto, quisiera dar las gracias a los donantes que se han comprometido desde el principio con el programa conjunto de apoyo a la Policía Nacional de Haití,

el “fondo colectivo”. Para lograr resultados será necesaria una acción sostenida y coordinada que preste un apoyo específico a las fuerzas del orden de Haití y que al mismo tiempo se ocupe de las reformas policiales y haga frente a las causas de la violencia a largo plazo. Es indispensable que se realicen inversiones en instituciones, infraestructura y capital humano. Insto a los asociados internacionales a que sigan reuniéndose periódicamente para evaluar los progresos y determinar las necesidades de cada momento, y a que añadan sin demora sus contribuciones al programa conjunto.

77. La UNODC sigue realizando avances en el cumplimiento de la solicitud del Consejo de Seguridad de reforzar el apoyo a las autoridades haitianas para mejorar la gestión y el control de las fronteras, gracias a una contribución financiera catalizadora de 1 millón de dólares del Gobierno de Haití. Además, la UNODC está ejecutando un proyecto de lucha contra la corrupción conjuntamente con el Fondo para la Consolidación de la Paz, el PNUD y el ACNUDH. Aliento a los Estados Miembros y a otros asociados a que aporten fondos para esta labor fundamental, sobre todo a la luz de las recientes incautaciones de armas y municiones ilícitas en los puertos de entrada de Haití y en el extranjero.

78. Reconozco las iniciativas que las autoridades nacionales han llevado a cabo para ajustar sus marcos legislativos y regulatorios relativos a las armas de fuego y las municiones a las normas regionales e internacionales vigentes. Celebro que se haya finalizado el plan de acción nacional para aplicar la Hoja de Ruta de la CARICOM para Implementar las Acciones Prioritarias del Caribe sobre la Proliferación Ilícita de Armas de Fuego y Municiones en Todo el Caribe de Manera Sostenible para 2030, y exhorto al sistema de las Naciones Unidas a que dé apoyo a las autoridades nacionales en la ejecución de sus metas y objetivos.

79. En relación con mi carta de fecha 8 de octubre de 2022 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad (S/2022/747), en la que se presentan opciones para mejorar el apoyo en materia de seguridad a Haití, aliento encarecidamente al Consejo de Seguridad a que actúe con prontitud al examinar la solicitud de apoyo del Gobierno. La mejora de la capacidad policial del país no bastará por sí sola para lograr el cambio transformador que Haití necesita a fin de abordar de forma sostenible la crisis multidimensional de seguridad. Es esencial que se hagan más esfuerzos en apoyo de las medidas preventivas y de rendición de cuentas contra la criminalidad y la violencia de las pandillas, entre ellos, programas de reducción de la violencia comunitaria, oportunidades socioeconómicas y medidas sustanciales para mejorar el funcionamiento de la cadena penal, especialmente en previsión del aumento de las detenciones que tendrá lugar como resultado del impulso a las operaciones contra las pandillas que realiza la policía nacional.

80. Quisiera expresar mi solidaridad con el pueblo haitiano durante esta crisis devastadora. Me gustaría también reconocer los incansables esfuerzos y la dedicación del personal de las Naciones Unidas en Haití, bajo la dirección de mi Representante Especial. Las Naciones Unidas seguirán colaborando estrechamente con Haití para brindar apoyo a una labor de titularidad nacional que beneficie a toda la población del país.